

Octubre 31 de 1973

38ª REUNION — 7ª SESION DE PRORROGA

Presidencia del doctor JOSE ANTONIO ALLENDE, vicepresidente 1º  
del Honorable Senado, y del doctor AMERICO ALBERTO GARCIA,  
vicepresidente 2º del Honorable Senado

Secretario: doctor ALDO HERMES CANTONI

Prosecretarios: señores RAFAEL ARANCIBIA LABORDA y DELFOR W. CARESSI

ALLENDE, José Antonio  
ANGELOZ, Eduardo César  
AVALOS, Pedro Isaac  
BARBORA de NASIF, Yamili  
BARONI, Danilo Luis  
BELENGUER, Emilio  
BRAVO, Leopoldo  
BRITOS, Oraldo Norvel  
BRIZUELA, Guillermo Ramón  
BRIZUELA, Hugo Genaro  
CAMPORA, Pedro L.  
CANTONI, Apolo  
CARO, J. Armando  
CERRO, Francisco Eduardo  
CORNEJO LINARES, Juan Carlos  
CHAILE, Juan Carlos  
D'AGOSTINO, Lucio Roque  
DE LA RUA, Fernando  
DÍAZ BIALET, Alejandro  
ESPERANZA, Joaquín Horacio  
FONROUGE, Alberto M.  
FROIS, Domingo Andrés  
FRJGOLI, Amadeo Ricardo  
GARCIA, Américo Alberto  
HERRERA, Dermidio Fernando L.  
HERRERA, José Jorge  
JAUREGUI, Rafael Zenón  
LORENZO, Ramón  
LOSADA, Mario  
LUDER, Italo A.  
MANCINI, Omar A.  
MARTIARENA, José H.  
MINICHELLI de COSTANZO, Martha S.  
MOREIRA, Miguel Orlando  
MORENO, Ramón Enrique  
PAZ, Eduardo Alberto

PENNISI, Afrio  
PERETTE, Carlos H.  
PERONI, Carmelo  
RODRÍGUEZ, Ginés Froilán  
ROMERO, Humberto Antonio  
SAADI, Vicente Leónides  
SALAS CORREA, Luis I.  
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito  
VAL, Buenaventura Justo  
VALLE de GONZALEZ, Leni Rosa  
VIVAS, Angel Juan Gregorio

AUSENTES, CON LICENCIA:

EVANS, Carlos H.  
NAPOLI, Antonio Oscar  
POSE, Jorge Juan  
PUGLIESE, Juan Carlos  
ZARRIELLO, Raúl Jorge

AUSENTES, CON AVISO:

BENI, Juan Carlos E.  
BLANCO, Rodolfo E.  
CACERES, Rubén Osvaldo  
CARNEVALE, Luis  
ELÍAS, Florencio  
FRANCO, Carlos A.  
GARCIA, Justino  
GRUBISICH, Pablo Eliseo  
LEÓN, Luis A.  
LORENZO, Jorge Luis  
LUNA, Pedro Antonio  
MARTÍNEZ, Julio César  
MAYA, Héctor Domingo  
MUNIAGURRIA, Camilo  
MURGUÍA, Edgardo P. V.  
SALMOIRAGHI, José César  
SAPAG, Elías

## SUMARIO

## 1.—Asuntos entrados.

- I.—Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita acuerdos. (Pág. 1853.)
- II.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se ordena integralmente el servicio exterior de la Nación. (Pág. 1853.)
- III.—Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Pág. 1854.)
- IV.—Comunicación de la señora senadora. (Página 1862.)
- V.—Comunicaciones oficiales. (Pág. 1864.)
- VI.—Dictámenes de comisiones. (Pág. 1864.)
- VII.—Peticiones particulares. (Pág. 1865.)
- VIII.—Proyecto de comunicación del señor senador Lorenzo (J.L.) sobre aprovechamiento del gas natural en Santa Cruz. (Pág. 1865.)
- IX.—Proyecto de ley del señor senador Martínez por el que se crea la Universidad Nacional de La Rioja. (Pág. 1866.)
- X.—Proyecto de ley de los señores senadores Saadi y Lorenzo (R.) por el que se fija peaje preferencial para vehículos transportadores de combustible por cuenta de YPF. (Pág. 1866.)
- XI.—Proyecto de comunicación del señor senador Paz sobre reactivación de talleres ferroviarios en Tucumán. (Página 1867.)
- XII.—Proyecto de ley de la señora senadora Minichelli de Costanzo por el que se modifica la ley 16.964 (sistema nacional de planeamiento). (Pág. 1868.)
- XIII.—Proyecto de comunicación del señor senador Herrera (D.F.L.) sobre servicio de telediscado en Catamarca. (Página 1869.)
- XIV.—Proyecto de ley del señor senador Cornejo Linares por el que se crea la Comisión nacional para la repatriación de los restos del brigadier general don Juan Manuel de Rosas. (Pág. 1870.)
- XV.—Proyecto de resolución del señor senador Cornejo Linares sobre promoción económica del Noroeste argentino. (Página 1872.)
- XVI.—Proyecto de ley de los señores senadores Rodríguez, Peroni y Baroni por el que se expropián tierras para la Universidad del Nordeste en Corrientes. (Pág. 1873.)

XVII.—Proyecto de ley del señor senador Belenguer por el que se crea una escuela profesional de mujeres en Río Negro. (Pág. 1874.)

XVIII.—Proyecto de ley del señor senador Belenguer sobre construcción de un edificio para Correos y Telecomunicaciones en Río Negro. (Pág. 1875.)

XIX.—Proyecto de comunicación del señor senador Solari Yrigoyen sobre emisión de sellos postales en homenaje al Colegio Nacional de Trelew. (Pág. 1876.)

XX.—Proyecto de ley de los señores senadores Saadi y Herrera (D.F.L.) por el que se otorga un subsidio a un colegio de San Fernando del Valle de Catamarca. (Pág. 1877.)

2.—Mociones de tratamiento sobre tablas. (Pág. 1877.)

3.—Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley en revisión sobre régimen de bajas de agentes del Estado. Se aprueba. (Pág. 1879.)

4.—Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley en revisión sobre jubilación de magistrados y funcionarios judiciales. Se aprueba. (Pág. 1890.)

5.—Consideración del dictamen de la Comisión de Industria y Minería en el proyecto de ley en revisión sobre promoción minera. Se aprueba. (Pág. 1897.)

6.—Designación del secretario del Honorable Senado. (Pág. 1899.)

7.—Orden de labor. (Pág. 1900.)

8.—Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de ley en revisión por el que se designa con el nombre de Manuel Belgrano a la Escuela Normal Mixta de Simoca, Tucumán. Se aprueba. (Pág. 1900.)

9.—Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se suprime en el Servicio Penitenciario Federal el grado de subadjutor auxiliar. Se aprueba con modificaciones. (Pág. 1901.)

10.—Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de ley de los señores senadores Lorenzo (J.L.), Bení y Solari Yrigoyen sobre recusación, excusación, impedimento, vacancia o licencia de jueces federales del interior. Se aprueba con modificaciones. (Página 1903.)

11.—Consideración del dictamen de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de comunicación de la señora senadora Minichelli de Costanzo sobre pavimentación de la ruta nacional 40. Se aprueba. (Pág. 1909.)

12.—Consideración del dictamen de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de comunicación del señor senador Moreno sobre adjudicación inmediata de la licitación de la ruta nacional 94. Se aprueba (Pág. 1911.)

13.—Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales en el proyecto de ley del señor senador Fonrouge y otros señores senadores por el que se concede autorización para aceptar una condecoración. Se aprueba. (Pág. 1913).

14.—Pedido de pronto despacho del señor senador Fonrouge para la comunicación del mismo señor senador relacionada con las islas Malvinas. (Página 1914.)

15.—Apéndice:

I.—Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 1915.)

II.—Inserción. (Pág. 1923.)

—En Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de octubre de 1973, a la hora 18 y 47, dice el

Sr. Presidente (Allende). — Con la presencia de treinta y ocho señores senadores en el recinto, que constituyen quórum reglamentario, queda abierta la séptima sesión de prórroga del presente período legislativo.

1

## ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Allende). — Por Secretaría se dará cuenta de los asuntos entrados.

Sr. Prosecretario (Arancibia Laborda). — (Leyendo):

I

### Acuerdos

Mensaje del Poder Ejecutivo por el cual se solicitan acuerdos. (A la Comisión de Acuerdos.)

II

Ordenamiento del servicio exterior de la Nación. — Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 27 de octubre de 1973.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad acompañando proyecto de ley por el que se dispone un ordenamiento integral del Servicio Exterior de la Nación y de su Instituto.

Es de imprescindible necesidad un ordenamiento en el Servicio Exterior de la Nación para asegurar su eficiencia de acuerdo a las pautas, orientaciones y objetivos de la política internacional argentina y de

la promoción de su política económica en el exterior.

Debe tenerse en cuenta en esta medida el mayor espíritu de justicia para su aplicación y el grado de capacidad profesional, vocación de servicio, contracción al trabajo y espíritu de disciplina como méritos y condiciones fundamentales insubstituíbles, para obtener el mayor ordenamiento que se desea lograr por la presente ley.

Este mismo espíritu de estricta justicia impone la revisión de las razones que han provocado la separación de funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, para la recuperación de aquellos cuyos servicios resulten útiles, conforme a los propósitos de la presente ley.

El Servicio Exterior debe ser herramienta idónea para la ejecución de una política internacional acorde con las exigencias del mundo moderno y la dinámica indispensable para la realización de los objetivos y metas de la Nación en sus relaciones con el mundo.

La presente ley de ordenamiento constituye un procedimiento de impostergable aplicación y tiende a subsanar inconvenientes y necesidades que han sido señaladas reiteradamente por la opinión pública y por las consecuencias de diversos hechos de la política exterior. Ello no significa en modo alguno, y para ningún caso, calificar la caracterización política de los integrantes del Servicio Exterior, sino, y esencialmente, la imperiosa articulación de un sistema moderno y actualizado que requiere una revisión en todos los aspectos y una profunda e inmediata adecuación de normas y métodos que den mayor vitalidad y coherencia a nuestras actitudes en las relaciones internacionales, que permitan a la Nación cumplir definitivamente con un papel activo en el proceso de cambio que se opera en el mundo.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN D. PERÓN.

Alberto Juan Vicente Vignes.

### PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Con el propósito de un ordenamiento integral del Servicio Exterior de la Nación se faculta por esta única vez al Poder Ejecutivo a dar por terminadas las funciones de los funcionarios diplomáticos de cualquier jerarquía y que por razones de mejor servicio deban ser removidos; en aquellos casos en que los funcionarios tengan acuerdo del Honorable Senado de la Nación, serán removidos con acuerdo de dicho cuerpo.

Art. 2º — Inclúyese dentro del reordenamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto del artículo anterior a los cursantes del Instituto del Servicio Exterior de la Nación.

Art. 3º — Siguen perteneciendo al cuadro permanente del Servicio Exterior de la Nación y en sus actuales condiciones, con excepción de las modificaciones escalafonarias establecidas en los artículos 5º y 6º de la presente ley, los funcionarios diplomáticos de cualquier jerarquía, que dentro de los noventa (90) días no hayan sido removidos, y aquellos a quienes dentro del mismo lapso se reincorpore, designe o promueva por vía de excepción, como lo autoriza la presente ley.

Art. 4º — Se consideran inamovibles y válidos los acuerdos que el Honorable Senado de la Nación haya prestado a todos los funcionarios cuyas funciones no hayan sido dadas por terminadas en virtud de la presente ley.

| Region and country | Average<br>1964-68 | 1969    | 1970    | 1971    | 1972    | 1973    |
|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Oceania:</b>    |                    |         |         |         |         |         |
| Australia .....    | 1,785.2            | 2,035.7 | 1,952.2 | 1,929.9 | 1,665.8 | 1,625.5 |
| New Zealand .....  | 697.6              | 723.1   | 736.1   | 710.5   | 680.8   | 650.4   |
| Total .....        | 2,482.8            | 2,758.8 | 2,688.3 | 2,640.4 | 2,346.6 | 2,275.8 |
| World Total .....  | 5,991.0            | 6,261.4 | 6,173.6 | 6,027.1 | 5,705.7 | 5,659.7 |

Foreign Agricultural Service. Prepared or estimated on the basis of Official Statistics of Foreign Governments, other Foreign Source Materials, Reports of U.S. Agricultural Attaches and Foreign Service Officers, results of Office Research and Related Information.

**Sr. Fonrouge.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Fonrouge.** — Solicito que la nota se reserve en Secretaría para hacer luego breves consideraciones.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente (Allende).** — Así se hará, señor senador.

## V

### Comunicaciones oficiales

El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su adhesión a la petición formulada por el Ejército Argentino al gobierno nacional, en el sentido de prescindir de las misiones militares extranjeras que operan en nuestro país. *(A la Comisión de Defensa Nacional.)*

—El Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda solicita que se extienda la ley de amnistía general al sector privado, determinando así la reincorporación de los cesantes por causas políticas y/o gremiales. *(A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales.)*

—La Honorable Cámara de Diputados de Córdoba solicitó que la actual Area Material de Córdoba con todas sus instalaciones y personal se transforme en la fábrica nacional de aviones, con estructura de empresa del Estado. *(A la Comisión de Economía.)*

—La Honorable Cámara de Diputados de Córdoba remite una declaración mediante la cual solicita se impida la demolición y desmantelamiento de los hoteles ABC de Colonia Marina Almirante Brown de Villa del Dique Calamuchita. *(A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)*

## VI

### Dictámenes de comisiones

#### DEFENSA NACIONAL:

En el proyecto de declaración de los señores senadores Brizuela (G. R.) y Jáuregui, por el que se manifiesta la adhesión a los principios sustentados por el señor comandante en jefe del Ejército en la X Conferencia de Ejércitos, celebrada en Caracas. *(Al orden del día.)*

#### EDUCACION:

En el proyecto de comunicación del señor senador Moreno relacionado con la paralización de la construcción de la Escuela Nacional N° 446 de la ciudad de La Banda, Santiago del Estero. *(Al orden del día.)*

#### PRESUPUESTO Y HACIENDA Y DE EDUCACION:

En los siguientes proyectos:

De ley del señor senador Beni sobre transferencia de bienes inmuebles afectados a la prestación de servicios de educación primaria que hubiesen sido reservados por la Nación conforme al artículo 10 de la ley 14.408. *(Al orden del día.)*

—De comunicación del señor senador Esperanza y otros señores senadores sobre transferencia del Instituto Angel T. de Alvear a la Universidad Nacional de Luján. *(Al orden del día.)*

#### INTERIOR Y JUSTICIA:

En el proyecto de ley en revisión sobre competencia de los jueces de instrucción y correccional. *(Al orden del día.)*

#### TRABAJO Y DE PREVISION SOCIAL:

En los siguientes proyectos de ley venidos en revisión de la Honorable Cámara de Diputados:

Sobre régimen de bajas de agentes del Estado fundado en razones de servicio y mediante el pago de una compensación resarcitoria.

—Sobre jubilación de magistrados judiciales, fiscales y asesores.

#### INDUSTRIA Y MINERIA:

En el proyecto de ley venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados sobre promoción minera.

**Sr. Martiarena.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

**Sr. Martiarena.** — Solicito que los dictámenes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Industria y Minería en los proyectos de ley venidos en revisión de la Honorable Cámara de Diputados, sean reservados para solicitar su posterior tratamiento sobre tablas.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente (Allende).** — Habiendo asentimiento, así se hará.

## VII

### Peticiones particulares

La Asociación de Funcionarios Retirados de Trabajo y Seguridad Social ofrece pautas a seguir para una mejor aplicación de las leyes sociales. (A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)

—La Liga Pro Comportamiento Humano solicita del Honorable Senado su intervención a fin de salvaguardar la moral y las buenas costumbres. (A la Comisión de Educación.)

—Las mesas de reconstrucción nacional de Gas del Estado elevan un informe sobre construcción de gasoductos de alimentación a Córdoba, San Luis, Mendoza y San Juan. (A la Comisión de Energía y Combustibles.)

—La Unión de Padres de Alumnos y Amigos del Colegio Calasanz formula consideraciones al proyecto de ley en revisión sobre estabilidad en el cargo del personal comprendido en la ley 13.047 que presta servicios en institutos privados y/o incorporados a la enseñanza oficial. (A la Comisión de Educación.)

—La Asociación de Maestros de Enseñanza Práctica formula observaciones al proyecto de reforma impositiva. (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)

—La Unión Ferroviaria eleva nota relativa al proyecto de reforma de la ley 14.455 (asociaciones profesionales). (A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)

—El Arzobispado de Córdoba manifiesta su adhesión al proyecto de ley en revisión sobre reincorporación de agentes que prestaban servicios en Ferrocarriles Argentinos, dejados cesantes por causas políticas o gremiales después del 16 de septiembre de 1955. (A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)

## VIII

### Aprovechamiento del gas natural de Santa Cruz.

**Proyecto de comunicación del señor senador Lorenzo (J. L.)**

#### Proyecto de comunicación

*El Senado de la Nación.*

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de sus organismos pertinentes, en este caso Gas del Estado, se sirva informar:

a) Si se han efectuado estudios relacionados con el gas natural que se extrae en las distintas zonas de la provincia de Santa Cruz, con miras a su aprovechamiento como materia prima de la industria petroquímica;

b) En caso afirmativo:

- 1) Quiénes han efectuado dichos estudios.
- 2) Cuáles son sus conclusiones.
- 3) Si actualmente ese gas es aprovechado o se tiene previsto emplearlo en petroquímica y, en ambos casos, por quién.
- 4) Si existen futuros planes de aprovechamiento petroquímico de ese gas, cuándo se tiene prevista su ejecución o puesta en marcha y lugar donde se prevé su emplazamiento.

*Jorge Luis Lorenzo.*

## FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La extraordinaria producción de gas de la provincia de Santa Cruz, tanto en su zona Norte como en la Sur, debe llamar poderosamente la atención de quienes sostienen que el aprovechamiento en el lugar de origen de los productos primarios de la economía es una cuestión irreversible por infinidad de razones técnicas, políticas y sociales.

La provincia de Santa Cruz, extensa en su territorio, escasamente poblada, con una ubicación geográfica que debe preocupar a todo gobernante bien inspirado, y especialmente con características geográficas poco comunes, reclama un inmediato desarrollo del sector transformador para romper el círculo vicioso en que naufraga toda posibilidad de aprovechar seriamente y con un sentido nacional todos aquellos bienes que surgen del suelo.

Resulta lamentable que un elemento como el gas, cuya particularidad es la de agotarse sin posibilidad de ser renovado, satisfaga solamente elementales necesidades del confort moderno, mientras se descuida, con falta de previsión y orden, su empleo como materia prima esencial para transformar algún sector de nuestra economía.

Una industria petroquímica ubicada en la provincia de Santa Cruz, que produjera nada más que abonos químicos, cumpliría una etapa importante dentro del ciclo natural, ya que compensaría el agotamiento de un elemento no renovable reemplazándolo con un factor que contribuiría al mejoramiento del suelo patagónico, permitiendo la diversificación de su aprovechamiento, que hoy sufre las angustias de toda economía basada en el monocultivo.

De más está referirse a los beneficios de la radiación de un complejo petroquímico en aquella región donde se extrae la materia prima, ya que siendo industria básica genera una serie de posibilidades, tanto en el campo económico como en el social y el político. Concretar una iniciativa como ésta no hace sino reflejar la filosofía expuesta tanto por la Unión Cívica Radical como por las actuales autoridades; es decir, concreta un compromiso de honor adquirido en todas las tribunas electorales del país con el pueblo para alcanzar la liberación de nuestra economía de yugos que la mantienen sometida a esquemas que contemplan necesidades extrañas a nuestro ser nacional.

El autobastecimiento en renglones fundamentales, con la consiguiente economía de divisas; el desarrollo de las economías regionales aprovechando sus recursos naturales en el sitio y volcándolos transformados al medio para cambiar substancialmente sus posibilidades económicas; la implantación de polos de crecimiento con radicación de argentinos aumentando la densidad de población, al poner en movimiento corrientes migratorias internas que absorban nuestro elevado nivel de desempleo, especialmente cuando ello se produce en beneficio de zonas estratégicas por su ubicación geográfica y creando fuentes de trabajo; todos ellos son algunos de los argumentos que constituyen pautas que deben impulsar al gobernante para decidir sin demora esta posibilidad de radicar complejos petroquímicos en la provincia de Santa Cruz.

Además, es hora de que la Nación reconozca de esa manera al interior la generosidad con que ha brindado su riqueza sin pausa en beneficio del país, devolviendo a la Patagonia la posibilidad de transformarse aprovechando sus recursos naturales, aplicándolos con tecnificación en beneficio del agro regional.

- 4º Instituto Secundario María Auxiliadora, de Comodoro Rivadavia.
- 5º Instituto Incorporado de Enseñanza Secundaria de Puerto Deseado.
- 6º Instituto Incorporado de Enseñanza Secundaria de San Antonio Oeste.

Es un acto de justicia que el gobierno nacional se sume a los homenajes que se tributarán en la zona de influencia al Colegio Nacional de Trelew, con la emisión de un sello postal conmemorativo de las bodas de oro del establecimiento. La estampilla propuesta testimoniará en los más diversos ámbitos el reconocimiento del país al aporte que el colegio de Trelew ha hecho a la educación y a la cultura en el Sur de la República.

*Hipólito Solari Yrigoyen.*

Certifico que el día veintiséis de abril de mil novecientos setenta y cuatro cumple cincuenta años de su fundación el primer establecimiento secundario oficial de la Nación creado en la Patagonia, Colegio Nacional de Trelew (Chubut). En Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre de mil novecientos setenta y tres, se extiende la presente constancia a los efectos de ser presentada ante las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones.

*María T. S. de Villa Maciel*  
Subdirectora Nacional de Educación  
Media y Superior

*Hipólito Solari Yrigoyen.*

—A la Comisión de Interior y Justicia.

**Sr. Solari Yrigoyen.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Chubut.

**Sr. Solari Yrigoyen.** — Señor presidente: entiendo, si no estoy mal informado, que este proyecto tendría que pasar a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

**Sr. Presidente (Allende).** — Pasará a ambas comisiones, señor senador.

**Sr. Solari Yrigoyen.** — Pido, entonces, que pase en primer término a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

**Sr. Presidente (Allende).** — Así se hará.

## XX

**Subsidio a un colegio de San Fernando del Valle de Catamarca.** — Proyecto de ley de los señores senadores Saadi y Herrera (D.F.L.)

### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º.—Acuérdase por esta única vez un subsidio de un millón de pesos (\$1.000.000) al colegio Nuestra Señora del Huerto, de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, con destino a la construcción y remodelación de aulas, instalaciones sanitarias, biblioteca, gabinetes de ciencias e instalaciones deportivas.

Art. 2º.—El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley se tomará de rentas generales, con imputación a la misma.

Art. 3º.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Vicente Leónides Saadi. — Dermidio Ferrnando L. Herrera.*

## FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El instituto Nuestra Señora del Huerto de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca es continuador de la Casa de Educandas, que comenzara a funcionar en el año 1809, es decir, el segundo establecimiento de ese tipo que hubo en la República.

La congregación de las religiosas de Nuestra Señora del Huerto se hizo cargo de la dirección de esa casa en mayo de 1874 —dentro de pocos meses se cumplirá el centenario—, abocándose de inmediato a la instrucción de la mujer en la provincia de Catamarca. Más de 20.000 alumnas han pasado por sus aulas beneméritas, en las que han bebido no solo la instrucción tradicional, sino, y principalmente, la formación moral, así como también el estudio de artes complementarias del hogar y manifestaciones del espíritu como lo son la música y la pintura, afianzando de este modo la estructura de sus futuros hogares y la formación de sus hijos.

Bajo la dirección de estas religiosas poco a poco se fue remediando la pobreza de las aulas, salvando las deficiencias arquitectónicas del edificio, subsanando los inconvenientes de enseñar con precarios medios, socorriendo necesidades de familiares de sus alumnas, para llegar a ser, de este modo, una de las más altas expresiones en la educación de la mujer en la región Noroeste del país.

Concurren en la actualidad a sus aulas alrededor de 800 alumnas, entre el ciclo primario y el secundario. Su personal docente está constituido por 45 profesores y 37 maestras.

Es aspiración de sus autoridades, educandas, familiares y, en fin, de la población toda, adecuar el edificio del instituto a las actuales necesidades de la educación y de la salud corporal de sus alumnas. Tanto es así que ya se ha comenzado a realizar mejoras en las aulas, a construir una cancha de deportes techada y con tribunas, instalaciones sanitarias y una pileta de natación. La concreción de esta aspiración, pese a la contribución y sacrificio de los padres de las alumnas, solo será posible con la intervención de los poderes públicos.

A la realización de este anhelo popular tiende este proyecto, que otorga un subsidio de un millón de pesos, y que es el mejor homenaje que este cuerpo puede hacer al cumplirse próximamente el centenario del instituto Nuestra Señora del Huerto, de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

*Vicente Leónides Saadi. — Dermidio Ferrnando L. Herrera.*

—A la Comisión de Obras Públicas.

**Sr. Presidente (Allende).** — Han quedado reservados los despachos en los proyectos de ley que fueran pasados en revisión a la Honorable



Cámara de Diputados, y que ésta devuelve aprobados con modificaciones, sobre régimen de bajas de los agentes del Estado, jubilación de magistrados y promoción minera.

**Sr. Martiarena.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

**Sr. Martiarena.** — Señor presidente: voy a hacer una breve referencia a esos tres despachos que pedí quedaran reservados sobre la mesa.

En los tres casos se trata de asuntos que han sido ampliamente debatidos por este honorable cuerpo, y que en la Cámara de Diputados han sido objeto de modificaciones que no son sustanciales sino de detalle. Por tal motivo, solicito que tratemos sobre tablas los tres despachos.

**Sr. Perette.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Perette.** — Señor presidente: nuestro bloque va a dar su voto favorable para el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley sobre promoción minera venido en revisión.

Asimismo, vamos a votar en contra de la consideración sobre tablas del proyecto de ley que se refiere al régimen de jubilación del personal judicial. Nuestra oposición, señor presidente, se basa concretamente en que se trata de un problema trascendente que debe merecer la consideración debida de la respectiva comisión. En ese sentido, no ha existido la debida citación de la comisión correspondiente, y estimamos, además, que se involucra un problema fundamental que hace al presente y futuro del Poder Judicial argentino que debemos preservar. En consecuencia, repito, nuestro voto será en contra del tratamiento sobre tablas de este asunto.

Con respecto al tercer punto, relacionado con la prescindibilidad del personal de la administración pública, nuestro sector también se va a oponer a su tratamiento sobre tablas, por cuanto entiende que además de no existir dictamen de comisión, según nuestro concepto, un proyecto de esta naturaleza debe ser profundamente meditado, y porque además sostiene una posición total y absolutamente en contra del contenido, el espíritu y la finalidad de esta iniciativa.

De esta manera, dejo sentado el voto del bloque de la Unión Cívica Radical con respecto a los tres asuntos, para los que se ha solicitado tratamiento sobre tablas.

**Sr. Solari Yrigoyen.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Chubut.

**Sr. Solari Yrigoyen.** — Quiero señalar, señor presidente, que integro la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la que soy vicepresidente, y no he sido citado por ningún medio a la reunión en que se ha tratado este tema. Supongo que esa reunión ha sido extraordinaria, porque en el último día de tablas la misma no se reunió. De manera que, como es lógico, desde mi punto de vista ese dictamen carece de validez.

**Sr. Pennisi.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

**Sr. Pennisi.** — Creo que debe existir un error por parte del señor senador Solari Yrigoyen, por cuanto desde el momento que existe un despacho de comisión es porque ésta se ha reunido para tratar el tema; lo que ocurre es que en el momento en que se consideró el señor senador Solari Yrigoyen posiblemente no se encontraba en la casa, ya que hemos tratado sin éxito de ubicarlo telefónicamente. Esa tiene que ser la razón. Pero de cualquier manera, cumpliendo los requisitos normales en un asunto de este tipo, se le hizo conocer cuál era el despacho, y se lo invitó formalmente a firmarlo si estaba de acuerdo o, si no lo estaba, a firmarlo en disidencia.

Además, éste es un tema que ha sido tratado oportunamente y en el que cada uno de los sectores ha hecho conocer su posición expresando lo que sentía con respecto al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. Nuestro bloque fijó su posición de apoyo con algunas reformas, y el radicalismo también manifestó su opinión. La comisión ha producido despacho firmado por los miembros presentes, que es favorable a las reformas introducidas. Una vez que se apruebe la moción de tratamiento sobre tablas expondré las razones respectivas.

**Sr. Solari Yrigoyen.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

**Sr. Solari Yrigoyen.** — Yo no dudo, señor presidente, de que el despacho existe, desde el momento que ello ha sido informado por la Presidencia con su seriedad habitual. Por otra parte, es exacto que momentos antes de ingresar en el recinto se me invitó a firmarlo. Pero insisto en que no he sido invitado a la reunión en que se trató ese dictamen.

El último día de tablas de la comisión estuve presente toda la mañana a la espera de que se realizara la reunión, lo que no ocurrió por un motivo atendible, pues los miembros de la mayoría tenían que asistir a una misa en memoria del fallecido secretario general de la CGT. Pero con posterioridad no he recibido invitación alguna para concurrir a esa reunión de comisión que cita el señor senador Afrio Pennisi, su presidente. Digo con todo respeto que considero esto como una descortesía, porque siempre me he manifestado dispuesto a estar presente en todas las reuniones de la comisión, y así lo habría hecho en esta oportunidad si se me hubiera invitado, aunque hubiera ocurrido en la mañana de hoy, pues me he encontrado donde habitualmente suelo estar.

Por ello, dejo sentado lo que ha ocurrido con la seriedad que el caso exige.

En cuanto a los argumentos que ha dado el señor senador Pennisi sobre el contenido del

asunto, no los debo contestar porque no es éste el momento de hacerlo, pues se debate una aclaración.

**Sr. Presidente (Allende).** — Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas de los tres despachos a que se ha referido el señor senador Martiarena.

—Se vota y resulta afirmativa.

3

**REGIMEN DE BAJAS DE AGENTES DEL ESTADO**

**Sr. Presidente (Allende).** — En consideración el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social sobre régimen de bajas de los empleados públicos. Por Secretaría se dará lectura al despacho de la comisión.

**Sr. Prosecretario (Arancibia Laborda).** — (Le-  
yendo):

**Dictamen de comisión**

*Honorable Senado:*

Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha considerado el proyecto de ley en revisión por el que se implanta un régimen de bajas de los agentes del Estado, fundado en razones de servicio y mediante el pago de una compensación resarcitoria; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

De acuerdo a los términos del artículo 91 del reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 31 de octubre de 1973.

*Afro Pennisi — Carmelo Peroni. — Luis I. Salas Correu. — Oraldo Norvel Britos.*

**Sanción de la Honorable Cámara de Diputados**

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

**Artículo 1º**— Autorízase hasta el 31 de marzo de 1974 a dar de baja y designar, por razones de servicio, al personal de planta permanente, transitorio o contratado que preste servicios en la administración pública nacional, organismos descentralizados, autárquicos, empresas del Estado y de propiedad del Estado, servicio de cuentas especiales, obras sociales y cualquier otra dependencia del mismo.

**Art. 2º**— Las bajas y designaciones a que se refiere el artículo anterior podrán ser dispuestas por los ministros, secretarios de Estado y autoridades superiores de los organismos y empresas mencionadas en el artículo 1º.

**Art. 3º**— El personal que sea dado de baja tendrá derecho a percibir una indemnización, por todo concepto, equivalente a un mes de la última retribución percibida, por cada año de servicios o fracción superior a seis meses computable en la administración pública nacional, provincial o municipal, pero su monto no podrá exceder de \$ 3.000 por cada año de servicio. El importe de la liquidación estará exento del pago del impuesto a los réditos.

**Art. 4º**— No tendrán derecho a indemnización los agentes que se encuentren en condiciones de obtener

o gocen de un beneficio de carácter previsional, sea jubilación, retiro o pensión, igual o superior al 70 % de la retribución computable para percibir la indemnización.

El Poder Ejecutivo podrá disponer un régimen de anticipo de prestaciones previsionales para quienes pudieran encontrarse comprendidos en el presente artículo.

**Art. 5º**— El personal que haya percibido la indemnización establecida o que haya sido dado de baja sin derecho a su percepción no podrá reingresar a la administración pública durante los cinco años subsiguientes, ya sea como agente permanente, transitorio o contratado. El Poder Ejecutivo reglamentará las excepciones a la incompatibilidad establecida en el presente artículo.

**Art. 6º**— Los importes de las indemnizaciones se atenderán con las partidas presupuestarias a las que se imputen los haberes de los agentes dados de baja o a los créditos que, a tal efecto, arbitrará el Poder Ejecutivo nacional, para lo cual queda facultado a disponer los pagos contra el disponible del presupuesto de gastos del organismo respectivo.

**Art. 7º**— Déjase en suspenso, hasta el 31 de marzo de 1974, toda norma legal, decreto ley, decreto, resolución, convención o disposición de cualquier naturaleza que se oponga a la presente ley o que disponga el pago de indemnizaciones distintas a las que aquí se establecen.

**Art. 8º**— Comuníquese al Poder Ejecutivo.

**Sanción original del Honorable Senado**

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

**Artículo 1º**— Autorízase hasta el 31 de marzo de 1974, para dar de baja y designar, por razones de servicio, al personal de planta permanente, transitorio o contratado, de la administración pública nacional, organismos descentralizados, autárquicos, empresas del Estado y de propiedad del Estado, servicios de cuentas especiales, obras sociales, organismos públicos no estatales y cualquier otra dependencia del mismo. La remoción de los funcionarios designados, conforme a lo dispuesto en la primera parte del artículo 86, inciso 10, de la Constitución Nacional, será con acuerdo del Senado.

**Art. 2º**— Las bajas y designaciones a que se refiere el artículo anterior podrán ser dispuestas por los ministros, secretarios de Estado y autoridades superiores de los organismos y empresas mencionados en el artículo 1º.

**Art. 3º**— El personal que sea dado de baja tendrá derecho a percibir una indemnización, por todo concepto, equivalente a un mes de la última retribución percibida, por cada año de servicio o fracción superior a seis meses computable en la administración pública nacional, provincial o municipal, pero su monto no podrá exceder de \$ 3.000 por cada año de servicio. El importe de la liquidación estará exento del pago de impuesto a los réditos.

**Art. 4º**— No tendrán derecho a indemnización los agentes que se encuentren en condiciones de obtener o gocen de un beneficio de carácter previsional, sea jubilación, retiro o pensión, igual o superior al setenta por ciento (70 %) de la retribución computable para percibir la indemnización.

El Poder Ejecutivo podrá disponer un régimen de anticipo de prestaciones previsionales para quienes pudieran encontrarse comprendidos en el presente artículo.



**JUBILACION DE MAGISTRADOS JUDICIALES**

**Sr. Presidente (Allende).** — Corresponde considerar el despacho en el proyecto de ley venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados, sobre jubilación de magistrados judiciales, fiscales y asesores.

Por Secretaría se dará lectura al dictamen de la comisión.

**Sr. Prosecretario (Arancibia Laborda).** — (*Le-yendo*):

**Dictamen de comisión**

*Honorable Senado:*

Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha considerado el proyecto de ley, en revisión, sobre jubilación de magistrados y funcionarios judiciales; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

Conforme al artículo 91 del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la Comisión, 31 de octubre de 1973.

*Afrío Pennist.* — *Luis I. Salas Correa.* — *Carmelo Peroni.* — *Oraldo Norvel Britos.*

**Sanción de la Honorable Cámara de Diputados**

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Los magistrados judiciales, fiscales, peritos con jerarquía equivalente a la de fiscal de primera instancia, asesores, defensores, secretarios, secretarios y prosecretarios de Cámara, director médico y demás funcionarios del Poder Judicial con categorías de idéntica remuneración, que acrediten una antigüedad de veinticinco años de servicios y un mínimo de ocho años en el ejercicio de funciones en el Poder Judicial de la Nación o de las provincias, siempre que opten por los beneficios de esta ley dentro de los treinta días a contar desde la fecha de su promulgación, podrán jubilarse en las condiciones establecidas por los decretos leyes 18.464 del año 1969 y 20.433 del año 1973, sin límite de edad en el ingreso o en el retiro, incluyendo el reconocimiento de los servicios que hayan prestado en la administración pública nacional, provincial o municipal, en la docencia, en el ejercicio de la profesión o en la actividad privada.

Art. 2º — Por esta única vez, los magistrados y funcionarios a que se refiere el artículo anterior, que se encuentren en condiciones para obtener la jubilación ordinaria de conformidad a los decretos leyes 18.464 del año 1969 y 20.433 del año 1973 y que tuviesen como mínimo sesenta años de edad, podrán acogerse dentro de igual plazo a los beneficios jubilatorios vigentes, aunque éstos exigiesen un mayor límite de edad. Vencido ese plazo quedarán sometidos a un régimen establecido en el decreto ley 18.037 del año 1968.

Art. 3º — Quienes ejercitasen los derechos establecidos en los artículos que anteceden, tendrán la

obligación de permanecer en sus cargos hasta que sean nombrados sus reemplazantes percibiendo, en ese caso, el haber mensual correspondiente.

Si cesare en el cargo por designación de su reemplazante, percibirán de inmediato y mensualmente el setenta y cinco por ciento de sus haberes a cuenta de la prestación jubilatoria que les corresponde.

Art. 4º — Las disposiciones establecidas en esta ley no serán de aplicación a los magistrados y funcionarios judiciales designados con posterioridad al 24 de mayo de 1973, quienes continuarán sometidos al régimen previsional vigente.

Art. 5º — Los magistrados y funcionarios que hubiesen cesado a partir del día 1º de junio de 1973, podrán acogerse a los beneficios de esta ley.

Art. 6º — Las prestaciones que correspondan abonar de acuerdo con esta ley, a beneficiarios que no reúnan los requisitos establecidos por los decretos leyes 18.464 del año 1969 y 20.433 del año 1973, se cargarán a rentas generales, hasta que aquéllos cumplan la edad exigida por los citados decretos leyes.

Art. 7º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

**ANTECEDENTES****PROYECTO DE LEY**

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Los magistrados judiciales, fiscales y asesores que acrediten una antigüedad de veinticinco años de servicios y una mínima de ocho años en el ejercicio de funciones en el Poder Judicial, siempre que opten por los beneficios de la presente ley dentro del término de sesenta días a contar desde la fecha de su promulgación, podrán jubilarse en las condiciones establecidas por la ley 18.464, sin límite de edad, e incluyendo el reconocimiento de los servicios que hayan prestado en la administración pública nacional, provincial o municipal, en la docencia o en la administración de justicia de las provincias adheridas al régimen nacional de reciprocidad jubilatoria.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Alejandro Díaz Bialek.* — *Vicente Leónides Saadi.*

**FUNDAMENTOS**

Señor presidente:

El régimen previsional que comprende a los magistrados judiciales limita el otorgamiento de la jubilación; muchos de ellos es ven precisados a continuar en el desempeño de funciones agotadoras en circunstancias en que aspirarían a culminar su vida con un retiro digno, equivalente al que se concede a favor de otras actividades cuyo esfuerzo determina un prematuro desgaste y fatiga.

El Poder Judicial merece el reconocimiento a la vocación social de dispensar justicia. Las disposiciones legales que obligan a quienes podrían jubilarse a proseguir en actividad hasta los sesenta y dos años resultan atentatorias de la libertad que debe afirmarse en su favor.

Por otra parte, las próximas reformas a los regímenes previsionales adaptadas a las concepciones más modernas estarán en condiciones de reconocer el derecho del trabajador a retiros que prolonguen en la pasividad los niveles de vida alcanzados en el trabajo, a la edad en que están aún en condiciones de disfrutar de un merecido descanso.

En tanto no se instrumenten tales medidas es conveniente proceder sin dilaciones a la derogación de todas aquellas que resulten injustas y arbitrarias, como la que afecta a los magistrados judiciales, privados del legítimo derecho que una legislación respetuosa del Poder Judicial debería reconocerles.

Mediante el proyecto de ley que se eleva, se resuelve la situación a efectos de que los magistrados se amparen, si lo desean, mediante expresa opción individual, en los justos derechos que se les reconoce.

Finalmente, corresponde observar que por el escaso número de beneficiarios de la ley propuesta, los compromisos financieros de la misma no incidirán sobre el régimen previsional.

*Alejandro Díaz Btalet. — Vicente Leóndes Saadi.*

### **Sanción original del Honorable Senado**

(3 de agosto de 1973)

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Los magistrados judiciales, fiscales, peritos con jerarquía equivalente a fiscal de primera instancia, asesores, defensores y secretarios, que acrediten una antigüedad de veinticinco años de servicios y una mínima de ocho años en el ejercicio de funciones en el Poder Judicial, siempre que opten por los beneficios de la presente ley dentro del término de treinta (30) días a contar desde la fecha de su promulgación, podrán jubilarse en las condiciones establecidas por la llamada ley 18.464, sin límite de edad, e incluyendo el reconocimiento de los servicios que hayan prestado en la administración pública nacional, provincial o municipal, en la docencia, en la administración de justicia de las provincias, en el ejercicio de la profesión o en la actividad privada, debidamente acreditados por inscripción a cajas previsionales.

Art. 2º — Quienes a la fecha de la sanción de esta ley se encuentren en condiciones para obtener la jubilación ordinaria de conformidad a las llamadas leyes 18.464 y 20.433, contarán con igual plazo que el señalado en el artículo anterior para optar al beneficio jubilarior, transcurrido el cual sólo podrán acogerse a los beneficios que establece el régimen de la llamada ley 18.037.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

**Sr. Presidente (Allende).** — En consideración en general. Tiene la palabra el señor senador Martiarena.

**Sr. Martiarena.** — Señor presidente: oportunamente he dado los fundamentos de mi pedido de tratamiento sobre tablas. Este proyecto corresponde a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, cuyo miembro informante es el señor senador Pennisi.

**Sr. Pennisi.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

**Sr. Pennisi.** — Compañero presidente, compañeros senadores: la Honorable Cámara de Diputados ha introducido algunas modificaciones al proyecto de ley sancionado por el Senado, que tienden a ampliar los beneficios acordados a otros funcionarios judiciales y asegurar la co-

recta aplicación de la ley, evitando que el masivo acogimiento a sus beneficios entorpezca la normal administración de justicia.

Por una de las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados, quedan comprendidos también en los beneficios de la ley los secretarios y prosecretarios de cámara, el director médico y demás funcionarios del Poder Judicial con categoría de idéntica remuneración. Aun cuando la redacción referida a este último sector de funcionarios no es muy apropiada, no hay duda que se refiere a los funcionarios que revistan en el nivel presupuestario equivalente.

Por otra de las modificaciones se facilitan los beneficios de la jubilación que acuerdan los decretos leyes 18.464 y 20.433, rebajando, por esta única vez, la edad mínima de 62 a 60 años. Un gran número de magistrados y funcionarios judiciales podrá entrar de inmediato a gozar del beneficio que acuerda la ley.

Contienen también las modificaciones dos disposiciones muy atinadas como es excluir expresamente del beneficio de esta ley a los magistrados y funcionarios designados con posterioridad al 24 de mayo de 1973 y acordarlo a quienes cesaron en sus funciones desde el 1º de junio de 1973; disposiciones muy equitativas, ya que sería una injusticia privar de este derecho a quienes, sin su voluntad, dejaron recientemente sus cargos en la administración de justicia. La Honorable Cámara de Diputados ha introducido una norma previsoras que es la del artículo 3º, estableciendo que quienes se acojan a los beneficios de esta ley no podrán abandonar el cargo hasta que se designe reemplazante. Se evita con ello una deserción masiva de magistrados y funcionarios, la que podría haber provocado la paralización de la justicia.

Y se completa esta norma con un agregado que es de indudable beneficio para quienes se acojan a la misma, como es el pago inmediato del setenta y cinco por ciento de sus haberes a cuenta de la prestación jubilarior. Esta previsión evitará la conocida angustia de los afiliados hasta que concluyen los trámites jubilariorios.

Finalmente, la sanción de la Honorable Cámara de Diputados ha introducido una última modificación de orden financiero al proyecto aprobado por este cuerpo. Por la misma se dispone que las prestaciones, cuando los beneficiarios no reúnan los requisitos establecidos por los decretos leyes 18.464 y 20.433, se abonarán por rentas generales, hasta que el afiliado cumpla la edad exigida por los citados decretos leyes. De esta manera, se evita que la caja de previsión realice esas erogaciones que podrían desequilibrar su posición financiera.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social ha considerado atinadas las modificaciones introducidas, sobre todo porque no alteran la finalidad

de la ley, ya que no se refieren al fondo de la misma. Se trata únicamente de ampliación de los beneficios y de disposiciones previsoras para la correcta aplicación de esta norma.

Por estas breves consideraciones que acabo de exponer y por los fundamentos que di en su oportunidad, me permito solicitar, compañero presidente, el voto afirmativo de los miembros de la Honorable Cámara.

**Sr. Solari Yrigoyen.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Chubut.

**Sr. Solari Yrigoyen.** — Quiero reiterar, señor presidente, lo que dije al considerarse el tratamiento sobre tablas: el despacho de la comisión no lleva mi firma en disidencia por la misma razón que expuse antes: no haber sido invitado, ni citado para participar de la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en la que se elaboró ese dictamen.

Como se trata de un proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados, para fijar claramente la posición de la bancada de la Unión Cívica Radical, nos remitimos a las argumentaciones ya dadas en la sesión del 3 de agosto último, cuando este cuerpo abordó inicialmente el tema.

Dijimos en aquella oportunidad que no nos gustaban los regímenes de excepción en materia jubilatoria y que preferíamos, como norma, los de carácter general. Pero al mismo tiempo, manifestamos nuestro acuerdo con el espíritu general que animaba a la iniciativa de los señores senadores Díaz Biale, Saadi y Fonrouge. Nuestra crítica no fue contra ese espíritu, sino que estuvo orientada al cambio de redacción que introdujo la comisión, la que agregó un artículo 2º que no aparecía en el proyecto original. En este artículo 2º, al conminar a los jueces a jubilarse dentro del plazo de treinta días o, en caso contrario, a acogerse a una jubilación de menor cuantía, se lesionan, a nuestro criterio, la investidura judicial y la estabilidad de los magistrados.

Por eso, nuestra impugnación en aquella sesión y que hoy reiteramos, se refirió, en lo fundamental, al artículo 2º. Con relación al artículo 1º, a pesar de no gustarnos la excepción, queremos darle una salida honorable a los jueces que no tienen acuerdo, los que, según nos enteramos por el debate en la Cámara de Diputados, son ciento setenta y cuatro.

Nos parece bien que estos jueces opten, si tienen, por un retiro digno, y lo mismo los más funcionarios que necesitan acuerdo para poder ejercer la magistratura. Pero al mismo tiempo nuestra oposición está en el otro caso: cuando conmina a los jueces al retiro, como ya hemos dicho, porque si no se les aplica prácticamente una sanción, que es la pérdida de la jubilación con el beneficio especial que tienen magistrados judiciales.

Quisiera aclarar, señor presidente, y creo que tengo la obligación de hacerlo, algo referido a la práctica parlamentaria que hemos empleado en el Senado todos los bloques y que los hombres de la bancada de la Unión Cívica Radical usamos con habitual frecuencia.

Nosotros impugnamos en el debate en general el articulado, a veces analizando caso por caso y después, para no hacer reiterativo todo el debate, cuando la ley se trata en particular, nos remitimos en forma genérica a las impugnaciones hechas anteriormente. Es por eso que cuando se votó este artículo 2º en la sesión del 3 de agosto no fue necesario que los senadores de la Unión Cívica Radical volviéramos a repetir la observación específica, que a mi entender, ya habíamos hecho con amplitud. Cuando se sometió el asunto a la votación en general ya habíamos aclarado textualmente que nuestro voto era favorable en general al proyecto pero marcando el alcance del apoyo en esas palabras que acababa de manifestar.

Me veo obligado a hacer esta aclaración porque en el debate de la Cámara de Diputados, el señor diputado Calabrese, sin duda con la mejor buena fe, dijo que el artículo 2º había sido votado por unanimidad. Y no hay tal cosa. Nosotros votamos en contra, pero lo que registra el Diario de Sesiones es, simplemente, que se ha votado sin observaciones y resultó aprobado. Eso no implica la unanimidad; conforme con esa práctica parlamentaria que he citado, tanto el señor senador de la Rúa como el que habla habíamos hecho la crítica en el debate en general.

Con estas consideraciones votaremos igualmente este proyecto en general, en cuanto estamos de acuerdo con esta salida de excepción, precisamente porque comprendemos con claridad que ha habido un régimen de excepción, como decía el señor senador García cuando tratábamos el tema anterior: siete años de gobierno de facto han obligado al país a tomar determinadas medidas que en otro caso no se hubieran adoptado.

Pero, en definitiva, queremos reiterar aquí nuestro apoyo incondicional al principio constitucional de la estabilidad de los jueces.

El señor senador de la Rúa y el senador que habla habíamos propiciado con anterioridad un proyecto que, por supuesto, reconociendo los derechos que tiene el Poder Ejecutivo de ejercer la facultad constitucional que le confiere el artículo 86, inciso 5º, de la Carta Magna, «tuviera en cuenta, salvo casos particulares en que puedan mediar graves razones en contrario, las promociones naturalmente operadas dentro de la carrera judicial; y contemplara así mismo la situación de quienes declinaron su ascenso, entendiendo que sólo debían jurar acatamiento a la Constitución Nacional». Porque, como lo dijimos en el anterior debate, ha habido muchos magistrados que han llegado por ascenso, sin

acuerdo del Senado, al cargo que actualmente ocupan, y entonces no sería lógico que, teniendo una carrera intachable y reuniendo todos los recaudos que la Constitución, la probidad moral y el cargo exigen, sean excluidos del Poder Judicial. Nosotros deseamos que estos funcionarios, aun sin acuerdo, sean confirmados, requiriendo a este honorable cuerpo el acuerdo respectivo.

Y para el caso de quienes han venido de afuera y no han llegado a la magistratura por la vía del ascenso, también le requerimos al Poder Ejecutivo que haga un análisis exhaustivo, tratando de no cometer injusticias y procurando estudiar cada caso para ver quiénes, aun habiendo alcanzado la judicatura por esta vía, son dignos de continuar ejerciéndola.

Voy a terminar rechazando la opinión que ha sido esbozada por un prestigioso constitucionalista de la Universidad Católica Argentina, en el diario «El Derecho», con la que trata de demostrar que hay una gravedad institucional en este régimen de excepción que, como hemos dicho, a los hombres de la bancada del radicalismo no nos gusta, pero comprendemos que se trata de una situación de hecho que hay que contemplar.

He formulado estos argumentos porque es precisamente este constitucionalista quien ha reconocido al poder de facto la facultad de nombrar jueces sin necesidad de acuerdo del Senado. Y es por esa circunstancia, y por la fundamentación que han esbozado otros constitucionalistas que justifican el gobierno absolutista, que nosotros presentamos en la primera sesión de este honorable cuerpo un proyecto para que no se registrara en el archivo reservado del Senado la inscripción de las nóminas del Poder Judicial, servicio diplomático y oficiales superiores de las fuerzas armadas correspondientes a designaciones y ascensos que requieran acuerdos, ocurridos desde el 28 de junio de 1966 hasta el 24 de mayo de 1973. Esto se fundaba en la vana pretensión de los decretos dictados el 16 de mayo de 1973 por el gobierno de facto —que llevan el número 4.512 y 4.462— por los que se dispone el registro de todos esos ascensos —en uso de las facultades senatoriales que sin duda no tenía el poder de facto— en el archivo reservado de esta Cámara. Ese argumento se esgrime en el periódico de la Universidad Católica.

Por eso quiero también aclarar aquí que si el Senado no ha dado curso al proyecto que yo presenté en ese entonces, es porque, contrariamente a lo que se establece en el artículo que comento, aquellos decretos del gobierno de facto nunca llegaron al Senado, y además porque aquí no se ha hecho ese registro. Aparte de que no podría haber sido registrado legalmente. Si hubiese ocurrido así no dudo de que este honorable cuerpo hubiera declarado inválida la registración.

Con este alcance que acabo de darle a mis palabras y con el que le den a las suyas los de-

más oradores de mi bloque, nosotros anunciamos el voto general a favor de la iniciativa y el voto en contra del artículo 2º, porque a nuestro entender lesiona la estabilidad del Poder Judicial.

**Sr. de la Rúa.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital Federal.

**Sr. de la Rúa.** — Es para nosotros muy importante la consideración de este proyecto en revisión a fin de dejar bien aclarada la posición de nuestro sector.

Como bien lo ha recordado el señor senador Solari Yrigoyen, en el debate realizado en la Cámara de Diputados, así como en el texto de los fundamentos dados por el presidente de la comisión respectiva y miembro informante de la mayoría, se expresó que hubo acuerdo unánime en este Senado respecto a la aprobación total del proyecto, «en un sereno y levantado debate».

Es cierto que aquel debate fue sereno y levantado y que nosotros apoyamos en general el proyecto presentado en su oportunidad. Pero lejos de haber habido unanimidad, nosotros manifestamos nuestra discrepancia enfática con relación al artículo 2º. Y esto es importante aclararlo, porque nosotros, como oposición, entendemos ejercerla en el mejor sentido constructivo. Alguna prensa ha tomado estas aparentes diferencias equivocadamente y también las invocó, a su vez, seguramente de buena fe, el señor diputado Calabrese, como si fueran diferencias de criterio tendientes a modificar la actitud de oposición constructiva que nosotros entendemos ejercer en este momento.

Lejos de discrepar, los diputados y senadores del radicalismo coincidimos en las observaciones al proyecto, en particular en su artículo 2º, porque entendemos que el Poder Judicial es una columna esencial de la República y que es fundamental resguardar la estabilidad de sus integrantes afirmando el respeto que les es debido.

Hemos apoyado el artículo 1º del proyecto tal como lo habían redactado sus autores los señores senadores Saadi, Díaz Biale y Fonrouge, con algunos agregados que fueron recogidos a sugerencia de nuestro sector. Lo hemos apoyado porque establece un beneficio que es de estricta justicia, precisamente para los integrantes del Poder Judicial. Con ese mismo alcance lo ha apoyado la Asociación de Magistrados.

Compartimos la solución del artículo 1º, no porque sea un «puente de plata» como se ha repetido muchas veces, sino por los fundamentos que dieran en su hora los autores del proyecto, vinculados al reconocimiento que merece el Poder Judicial por su vocación social y de justicia.

En esta oportunidad reafirmamos nuestra posición de que es imprescindible el requisito del acuerdo prestado por el Honorable Senado en base a la propuesta del Poder Ejecutivo, ya que quien carece de él no tiene estabilidad; pero coincidimos también, como aquí se ha dicho, en que debe tenerse en cuenta, dentro de lo posi-



ble, la carrera judicial, de modo de no producir soluciones injustas en los cuadros del Poder Judicial de la Nación.

La Honorable Cámara de Diputados ha introducido algunas modificaciones al artículo 19 que consideramos adecuadas: ha agregado los prosecretarios y demás funcionarios de jerarquía equivalente, acercándose a la amplitud que propiciábamos para el texto legal. Así mismo recoge la sugerencia que hiciéramos de referirse en este artículo 19 no sólo a la llamada ley 18.464, sino también a sus modificatorias, y suprime el último párrafo por ser necesario.

De modo que, con mayor razón ahora, reiteramos nuestro voto favorable en lo que respecta al artículo 19; pero nuestra oposición, señor presidente, cabe insistir al respecto, radica en el artículo 29, que viene ahora también modificado por la Honorable Cámara de Diputados. La expresamos en el debate anterior y ahora la reiteramos. Se trata de un agregado al proyecto originario introducido primeramente en la comisión respectiva de este Honorable Senado, que implica negar a quienes son actualmente jueces los beneficios de la llamada ley 18.464, modificada por la llamada ley 20.433. Pero no se derogar esas leyes, señor presidente, por lo que los jueces nombrados después de la sanción de esta que hoy consideramos tendrán un régimen privilegiado con respecto a los demás; es decir, que los actuales jueces con acuerdo sólo podrán jubilarse, si no lo hacen ahora, en el plazo de treinta días, por el régimen de la ley 18.037, mientras que los que se nombren en adelante podrán invocar los mayores beneficios de las leyes 18.464 y 20.433.

Resulta así que lo establecido por el artículo 29 es una exclusión de los beneficios de una ley general a un grupo de jueces por el solo hecho de serlo actualmente, en tanto se mantiene la ley para quienes lo sean a partir del 24 de mayo de 1973. Esta es una discriminación injusta que viola la igualdad ante la ley y que, como se ha dicho con razón, afecta la estabilidad de los jueces con acuerdo sometiendo a una coacción indirecta y sutil. La Constitución Nacional prevé la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados, y se viola el espíritu de la norma constitucional cuando se niega a ciertos magistrados, sin razón suficiente, los beneficios que se acuerdan a otros, y esto surge expresamente del texto aprobado por la Honorable Cámara de Diputados cuando, en su artículo 49, excluye de las normas de esta ley a los magistrados designados con posterioridad al 24 de mayo de 1973 «quienes —dice el texto— continuarán sometidos al régimen previsional vigente».

El señor diputado Calabrese, en su informe, se refiere al concepto de igualdad ante la ley y reconoce que resultará violado cuando existan actos arbitrarios, hostiles, o injustos privilegios en la forma de establecer las diferencias.

Sostiene que aquí el privilegio no es injusto. Creo que una discriminación basada exclusivamente en el tiempo y en la circunstancia de que haya jueces que actualmente lo son con acuerdo, diferenciándolos así de quienes accedan a la magistratura con posterioridad, constituye para éstos un privilegio injusto que vicia a la norma de inconstitucionalidad.

Por eso sostengo que es inconstitucional la exclusión del régimen jubilatorio vigente de los actuales jueces que no se acojan a él dentro de los treinta días.

Debo decir por último, señor presidente, que en esta oportunidad es importante reafirmar que los jueces que tienen acuerdo del Honorable Senado lo conservan, pese a la desgraciada circunstancia de que la República haya tenido que afrontar las consecuencias de un golpe militar a partir del 28 de junio de 1966.

Esta cuestión se insinuó ya en la anterior sesión en que tratamos este tema. El señor senador por Catamarca fijó una posición contraria a la que nosotros sostuvimos y ahora reiteramos, pero en la Honorable Cámara de Diputados el punto ha quedado esclarecido por el uniforme criterio de todos los sectores.

Efectivamente, ante una pregunta expresa del señor diputado Mauhum en el sentido de si los jueces que tuvieron acuerdo del Senado antes del 28 de junio de 1966 tenían inamovilidad absoluta, el señor diputado Calabrese, hablando en nombre del sector de la mayoría, respondió que sí, agregando que esto involucra a aquellos jueces a quienes el Senado prestó acuerdo durante el gobierno del doctor Illia. Esta es la sana doctrina. Y al aventar las dudas y las suspicacias a que puede llevar una manifestación contraria, creo que estamos reafirmando el respeto a la justicia y a la estabilidad de los magistrados.

Estos conceptos fueron claramente expuestos, no sólo por el señor diputado Calabrese sino también por los señores diputados Massolo, en su brillante intervención, Vesco, en su claro discurso, y Catalano, que ha integrado con prestigio los cuadros judiciales de su provincia.

Ya ha adelantado el señor senador Solari Yrigoyen la posición de nuestro sector: votaremos afirmativamente en general este proyecto, con la disidencia expresa respecto al artículo 29, que merece nuestra crítica por las razones expuestas. Entendemos, de este modo, afirmar el esencial respeto que merece la administración de justicia y en particular el orden institucional, que si fue afectado por la irrupción de un golpe militar no debe encontrar en los hombres de la democracia los argumentos que sirvan para intensificar los efectos dañinos y negativos de esas incursiones armadas en la vida civil de los argentinos.

Nosotros tenemos confianza en que la actitud general del Poder Ejecutivo será de prudencia y de respeto. Al frente del Ministerio de Justicia

está un hombre de probada conducta, y mientras él permanezca en el cargo estamos seguros de que esta ley tendrá la recta aplicación que los tiempos y las circunstancias del país reclaman.

Con este alcance, señor presidente, votaremos afirmativamente el proyecto en general dejando desde ya anticipada la disidencia sobre la cual insistimos.

**Sr. Saadi.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

**Sr. Saadi.** — Señor presidente: he escuchado con el mayor interés las exposiciones de los señores senadores de la bancada opositora. No hay discrepancia en cuanto a la primera parte del proyecto de ley sometido a la consideración de este honorable cuerpo, pero debo decir que nosotros no aceptamos, de manera alguna, el alcance ni la interpretación constitucional que dicen dar a los jueces con acuerdo, porque éstos no existen. En el año 1955, cuando la dictadura militar dio el golpe de Estado, descabezó al Ejecutivo, al Legislativo y a la Corte Suprema. Y siendo así, ha caducado el acuerdo de todos los demás jueces, como lo he sostenido oportunamente.

La exposición que acaba de hacer el señor senador de la Rúa, citando palabras del señor Calabrese, es una opinión personal que la bancada del Frejuli no comparte. Por lo menos no es compartida en la Cámara de Senadores de la Nación, y estoy cierto de que tampoco es ésa la interpretación en la Cámara de Diputados.

Este proyecto es el producto de la época que estamos viviendo, y procura la unidad de la familia argentina. No hemos querido hacer uso todavía de la interpretación constitucional auténtica acerca de la falta de acuerdo de todos los miembros del Poder Judicial porque hemos preferido buscar el puente de plata para no crear situaciones que podrían interpretarse de otro modo. Pero, señor presidente, no podemos dejar de decir que aquellos jueces que se prestaron a la persecución despiadada de los argentinos, con la inversión de la prueba y las leyes de interdicciones; que aquellos jueces que aceptaron la prórroga de su jurisdicción, con la «cámara del terror»; que aquellos jueces que legalizaron la entrega del patrimonio argentino, que en un 85 por ciento fue entregado al imperialismo extranjero...

**Sr. de la Rúa.** — ¿Me permite una interrupción?

¿No cree, señor senador, que la vía adecuada para remediar esos casos a que se refiere es la del juicio político y no la de una interpretación distinta sobre la situación de los jueces designados con acuerdo del Honorable Senado en su momento?

**Sr. Saadi.** — No he creído que este cuerpo, que tiene tanto que hacer para la reconstrucción nacional, deba perder el tiempo en juicio político

a semejantes pecadores. Y mucho más cuando sostenemos que carecen de acuerdo constitucional. Esta es la razón, señor senador de la Rúa.

**Sr. de la Rúa.** — Con la venia de la Presidencia quiero decirle al señor senador que no es perder el tiempo utilizar el instrumento del juicio político, que sirve para sanear nada menos que a la administración de justicia, que es el pilar básico de las instituciones republicanas.

**Sr. Saadi.** — Señor senador: no tengo ningún inconveniente en contestar a su pregunta porque estos jueces carecen de acuerdo; lo han perdido. Y le pregunto al señor senador como jurista: ¿usted cree que los jueces que han jurado por el estatuto de la revolución emanado de la dictadura militar siguen disfrutando de la estabilidad constitucional?

**Sr. de la Rúa.** — Absolutamente no, porque los que han jurado por el estatuto fueron designados por el gobierno militar, y los que tienen acuerdo fueron nombrados por el gobierno constitucional.

**Sr. Saadi.** — Entonces estamos de acuerdo en una parte, y me alegro de ello.

**Sr. de la Rúa.** — Ese es un dato objetivo, señor senador.

**Sr. Saadi.** — Pero cuando ha sido destituida la cabeza, o sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿cree usted, señor senador, que esos señores jueces seguían conservando el acuerdo?

**Sr. de la Rúa.** — Sí, señor senador.

**Sr. Saadi.** — Allí está nuestra discrepancia, señor presidente. Nosotros creemos que han perdido el acuerdo, y al respecto se halla pendiente de tratamiento un proyecto de ley presentado por quien habla, que establece tal hecho, y que desearía que quede pendiente en la comisión.

Pienso que los jueces buenos son muy pocos. Y a título de ejemplo, porque no quiero personificar, diré que hubo jueces y una Cámara que han declarado traidor de la patria al insigne jefe del movimiento justicialista, que han encarcelado a medio país y que han desposeído arbitrariamente de sus bienes a los que no compartían la dictadura militar. Considero que por la salud de la República, como una profilaxis para la justicia, se deben tomar oportunamente las medidas del caso.

Hemos procurado, accediendo a un pedido del Poder Ejecutivo, proyectar esta ley «puente de plata», como la hemos llamado en su momento. Pero esto no significa que la bancada del Frente Justicialista de Liberación en manera alguna renuncie a la interpretación constitucional que ha dado sobre el particular.

Por estas razones, señor presidente, y haciendo mías todas las argumentaciones dadas por el señor miembro informante de la comisión, solicito su aprobación.

**Sr. Fonrouge.** — Pido la palabra.



**Sr. Presidente (Allende).** — Previamente, tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Perette.** — Se la cedo al señor senador Fonrouge.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Fonrouge.** — Simplemente, señor presidente, quería sumar breves palabras a las dichas con respecto a la interpretación que corresponde hacer respecto de la situación en que se encuentran los jueces que puedan ser considerados todavía con acuerdo.

El Acta de la Revolución Argentina, o sea la documentación que instrumentó el movimiento militar del año 1966, establecía claramente que la misma dejaba caducos los tres poderes de la Constitución. Es decir, que así como arrasó con el Poder Ejecutivo que estaba en manos del partido al que pertenecen los señores senadores de la bancada radical, también avasalló al Congreso; y ¿por qué no iba a ser lógico y consecuente en la interpretación de esta documentación, decapitando al Poder Judicial?

**Sr. de la Rúa.** — Iba a solicitar una interrupción al señor senador por Buenos Aires, pero observo que ha terminado en el uso de la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tenía la palabra concedida el señor senador Perette. Si él se la cede la Presidencia no tiene inconveniente en darle el uso de la misma.

**Sr. Perette.** — Se la cedo, señor presidente.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital Federal.

**Sr. de la Rúa.** — Es para una aclaración, señor presidente, porque ése documento de lamentable recordación llamado Acta de la Revolución Argentina —por el cual han jurado muchos jueces— no declaró la caducidad del Poder Judicial, sino que en su punto 4º dispuso separar de sus cargos a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y al procurador general de la Nación. Por lo tanto, no demos a estos documentos una interpretación más amplia, llevándolo más allá de lo que en realidad fueron sus negativos alcances.

**Sr. Díaz Biale.** — La revolución argentina subordinó la Constitución al acta y ello produjo el aniquilamiento total de los poderes.

**Sr. de la Rúa.** — Produjo el aniquilamiento de la República, del cual estamos tratando de salir, y no lo lograremos haciendo aparecer el daño mayor de lo que fue, sino preservando las instituciones en todo lo posible.

**Sr. Díaz Biale.** — Lo que he expresado justifica la tesis sostenida por el señor senador Saadi, cuando dijo que también había aniquilado al Poder Judicial.

**Sr. de la Rúa.** — Considero que no, y en esto me acompaña la opinión de la bancada mayoritaria de la Cámara de Diputados.

**Sr. Díaz Biale.** — Es una opinión personal.

**Sr. Fonrouge.** — No se trata de usar ese argumento para sembrar incertidumbre en la vida de los magistrados que tienen ese llamado acuerdo. Se trata de dejar en claro la interpretación que en defensa de la salud institucional de la Argentina debemos hacer todos los que creemos en la Constitución.

**Sr. de la Rúa.** — Con la venia de la Presidencia, contesto brevemente, porque sus apreciaciones, como las del señor senador por Catamarca, implican un juicio de valor subjetivo, es decir, implican obviar el juicio político a que se sienten con derecho respecto de algunos magistrados; mediante una interpretación constitucional, para evitar pérdidas de tiempo, pretenden lograr por esa vía la remoción de jueces que no merecerían serlo. Emprendamos el camino correcto: hagamos el juicio político y saneemos la justicia, pero no querramos hacerlo por vía de interpretaciones forzadas que resultan negativas.

**Sr. Fonrouge.** — Lo que se hace en un juicio político es juzgar a un juez, y nosotros estamos de acuerdo en que ya no lo era después del movimiento de 1966.

**Sr. de la Rúa.** — Ese es el punto de la discrepancia.

**Sr. Presidente (Allende).** — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Perette.** — Los señores senadores de la Rúa y Solari Yrigoyen han reflejado el pensamiento de nuestro sector en esta materia. Las palabras pronunciadas precedentemente me obligan a decir que ratificamos con mucha preocupación nuestra inquietud sobre el presente y el futuro del Poder Judicial argentino.

Entendemos, señor presidente, que los jueces que tienen acuerdo poseen valimiento legal para seguir en sus funciones. En consecuencia, no participamos del criterio sustentado por la opinión del señor senador doctor Saadi; lo digo con todo respeto. Considero que debemos evitar de todas las maneras posibles que se produzca un vaciamiento en la justicia argentina. Puede haber jueces que hayan cometido graves errores y faltas, pero la Constitución tiene su propio remedio, que es el camino del juicio político para hacerlo.

Además, señor presidente, entiendo que el artículo 2º del proyecto de ley que se está tratando significa dejar en cuarentena a una enorme cantidad de magistrados del Poder Judicial, e implica una incertidumbre para el mismo, a pesar de la buena disposición mostrada por el señor senador Fonrouge.

La defensa del Poder Judicial, que nos preocupa fundamentalmente, hace a la esencia de la sociedad republicana y a la vigencia de las instituciones democráticas del país.

No hacemos cuestiones de orden personal. Hay jueces dignos que están todavía en esa situación

de incertidumbre en la República y que no cuentan con la aprobación para su gestión futura.

Nos preocupa fundamentalmente que se pueda establecer una teoría que aplique el criterio del régimen de la incertidumbre nada menos que para el Poder Judicial, que debe ser la base del poder regulador dentro del sistema armónico de nuestro régimen constitucional.

Por estas razones, señor presidente, dejo definida nuestra posición en apoyo de la independencia del Poder Judicial y del principio de igualdad de los poderes.

**Sr. Presidente (Allende).** — Si ningún senador hace uso de la palabra, se va a votar en general.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Allende).** — Se va a votar en particular.

—Sin observación, se vota y aprueba el artículo 1º.

—Se lee el artículo 2º.

**Sr. Frugoli.** — Pido la palabra.

Deseo dejar constancia de mi oposición a la aprobación de este artículo 2º.

**Sr. Perette.** — Pido la palabra.

Deseo ratificar la oposición que hemos formulado en el debate en general, con respecto al artículo 2º, y dejar constancia del voto negativo de la representación radical.

**Sr. Presidente (Allende).** — Se va a votar el artículo 2º.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación, se votan y aprueban los artículos 3º, 4º, 5º y 6º.

—El artículo 7º es de forma.

**Sr. Presidente (Allende).** — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley (1).

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

## 5

### PROMOCION MINERA

**Sr. Presidente (Allende).** — Corresponde considerar el despacho de la Comisión de Industria y Minería en el proyecto venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados, sobre promoción minera.

Por Secretaría se dará lectura al dictamen de comisión.

**Sr. Prosecretario (Arancibia Laborda).** — (Leyendo):

#### Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Industria y Minería ha considerado las modificaciones introducidas por la Ho-

norable Cámara de Diputados al proyecto de ley en revisión sobre promoción minera; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

Sala de la comisión, 31 de octubre de 1973.

Buenaventura Justo Vai. — Ramón Lorenzo. — Apolo Cantoni. — Pedro Isaac Avalos.

### ANTECEDENTE

Sanción venida en segunda revisión de la Honorable Cámara de Diputados

Buenos Aires, 24 de octubre de 1973.

Señor presidente del Honorable Senado:

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha considerado en sesión de la fecha las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión sobre promoción minera y ha tenido a bien aceptar las de los artículos 1º, 2º, incisos d), c) y f); 3º, incisos b) y c); la supresión del artículo 7º y el cambio en la numeración correlativa de los artículos que le siguen; la modificación del artículo 9º, que pasa a ser 8º; el cambio de expresiones en el artículo 11, que pasa a ser 10; la incorporación del subtítulo «Beneficio para las empresas, en el artículo 12 y las modificaciones a los incisos h) e i), la eliminación del penúltimo párrafo que dice «la reglamentación de la presente ley establezca el procedimiento para la ampliación de este artículo», la incorporación en el último párrafo después de la palabra «fiscalizará», de la expresión «por intermedio de la autoridad minera correspondiente», y la incorporación, después del último párrafo del artículo, del subtítulo «Beneficio para los inversionistas», con su inciso a); en el artículo 14, que de acuerdo con la nueva numeración pasa a ser 13, la incorporación, antes del inciso c) que pasa a ser d), de un nuevo inciso, que pasa a ser c); y la modificación del anterior inciso c), que pasa a ser d), la incorporación propuesta al punto 7 del inciso c) que pasa a ser d), y el agregado de un nuevo inciso e), así como la eliminación del inciso j); la transformación del inciso k) en artículo 14 con su nueva redacción; el agregado y la modificación del artículo 15; el agregado al artículo 16, inciso c); la modificación del inciso a) del artículo 17; en el artículo 18 los agregados al inciso l) y la incorporación de un nuevo inciso, que lleva la letra ll); la modificación de los artículos 19, 20 y 21 y la sustitución en este último artículo del inciso a) y el reemplazo de la segunda parte del inciso e); la transformación del inciso e) del artículo 24 en un nuevo artículo, que pasa a ser el número 27; el cambio de número del artículo 28 por 29; la sustitución del artículo 29 por el actual 30 y el artículo 31 que se agrega.

Y rechazar las modificaciones correspondientes al inciso c) del artículo 2º; el reemplazo de los artículos 4º y 5º; el agregado al primer párrafo del artículo 12 que pasa a ser 11, y las modificaciones al artículo 22, insistiendo en la anterior sanción de esta Honorable Cámara.

SALVADOR F. BUSACCA.  
Alberto L. Rocamora.

(1) Véase el Apéndice.